



## **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL**

**Medellín, veinticinco de julio de dos mil veintidós**

De conformidad con el artículo 373 del CGP en concordancia con el artículo 14 del Decreto 806 de 2020 por escrito, se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2021 por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín en el proceso ordinario instaurado por SILVIA LUZ GONZÁLEZ ARANGO Y WILMAR ALONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ (SUCESTORES PROCESALES DE SAMUEL CONRADO GONZÁLEZ ARANGO) contra OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ, JUAN FERNANDO TORO ARCILA, JUANA NOELIA ARCILA TAMAYO Y SILVIA EUGENIA HERRERA RUÍZ.

### **1. ANTECEDENTES**

**1.1 SAMUEL CONRADO GONZÁLEZ ARANGO** demandó ante el Juez Laboral a **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ**; resultando condenado a partir del 19 de octubre de 2004 al pago de la pensión de invalidez por no afiliarlo a la seguridad social mientras laboró en su finca como mayordomo.

1.2 El demandante inició proceso ejecutivo ante el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín, que libró mandamiento de pago por \$55'477.200 el 19 de mayo de 2010.

1.3 **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ** vendió “simuladamente” el 7 de febrero de 2005 el 50% de los bienes con matrículas inmobiliarias Nos. 001-596758 y 001-596759 a su hijo **JUAN FERNANDO TORO ARCILA**, lo que ha dificultado el cumplimiento de la obligación dineraria a la que fue condenado mediante sentencia y por la cual está siendo ejecutado.

1.4 Posteriormente los bienes fueron vendidos “de forma simulada” por **JUAN FERNANDO TORO ARCILA** y **JUANA NOELIA ARCILA TAMAYO** a **SILVIA EUGENIA HERRERA RUÍZ** el 11 de enero de 2008.

1.5 La pretensión de **SAMUEL CONRADO GONZÁLEZ ARANGO**, cuya posición procesal fue asumida por **SILVIA LUZ GONZÁLEZ ARANGO** y **WILMAR ALONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ** como sucesores procesales es declarar simulada absolutamente la compraventa del 50% de los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 001-596758 y 001-596759 realizada por **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ** a su hijo **JUAN FERNANDO TORO ARCILA** mediante escritura pública No. 220 del 7 de febrero de 2005.

Declarar simulada absolutamente la compraventa del 100% de los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 001-596758 y 001-596759 realizada por **JUAN FERNANDO TORO ARCILA** y **JUANA NOELIA ARCILA TAMAYO** a **SILVIA EUGENIA HERRERA RUIZ** mediante escritura pública No. 32 del 11 de enero de 2008.

Como pretensiones subsidiarias, pidió la declaratoria de simulación relativa de los negocios referidos.

## **2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ, JUAN FERNANDO TORO ARCILA y JUANA NOELIA ARCILA TAMAYO** fueron emplazados y representados por curador *ad-litem*, quien se atiene a lo que resulte probado en el proceso.

**SILVIA EUGENIA HERRERA RUÍZ** presentó como excepciones de mérito la “inexistencia de acto simulatorio” y “buena fe contractual”; los negocios fueron realizados cumpliendo los requisitos legales, se pactó un precio y fue pagado efectivamente.

## **3. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA**

El Juez de primera instancia negó las pretensiones; analizó los requisitos de existencia y validez de los contratos celebrados mediante escrituras públicas No. 220 del 7 de febrero de 2005 y 32 del 11 de enero de 2008; encontrándolos satisfechos.

Consideró acreditada la calidad de acreedor del demandante con la condena impuesta en su favor y contra el demandado por el Juez Laboral, por lo que está legitimado por activa para deprecar la recomposición del patrimonio del último; la cónyuge supérstite y el hijo son los llamados a ser sus sucesores procesales luego de su fallecimiento acreditado en el plenario.

En lo referente con la prueba del acto simulado indicó:

- i) No se allegaron los registros civiles que acreditaran la relación de parentesco entre **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ** y **JUAN FERNANDO TORO ARCILA**; tampoco la calidad de cónyuge del primero de **JUANA NOELIA ARCILA TAMAYO**.
- ii) Aun si se hubiese probado la relación familiar, la jurisprudencia ha establecido que no es suficiente para tener por simulados los actos jurídicos.
- iii) No se adjuntó prueba de las simulaciones; los testigos del demandante no comparecieron y éste sólo se limitó a enunciar distintas anotaciones de los certificados de tradición.
- iv) Frente al segundo contrato de compraventa, se acreditó que **SILVIA EUGENIA HERRERA** no era conocida por los vendedores; se pactó un precio desde un documento preparatorio; se garantizó el pago con hipoteca; se suscribió un pagaré para respaldar la obligación; ha ejercido actos de señor y dueño, utilizando sus propias cesantías para hacer reformas al inmueble.

#### 4. APELACIÓN

El demandante reconoció que existe un “vacío probatorio” relacionado con las pruebas testimoniales “que se diluyeron en el tiempo”; sin embargo, no se podían dejar de valorar los indicios relevantes para el caso concreto:

- i) El Juez no interrogó a la demandante sobre si conocía a los compradores **SILVIA EUGENIA HERRERA** y su esposo. **LUIS A.**

**CALDERÓN** indicó que sí conocía a **JUANA NOHELIA ARCILA** y **JUAN FERNANDO TORO ARCILA**, frente a quienes pudo verificar de alguna forma, que eran la esposa e hijo de **OVIDIO DE JESÚS TORO**.

- ii) Se omitió resaltar que **OVIDIO DE JESÚS TORO** nunca compareció al proceso y se “despatrimonializó” para no pagar lo debido al demandante.
- iii) No se dio aplicación a la teoría de “los frutos del árbol envenenado”.
- iv) El Juez no tuvo en cuenta que se podía invertir la carga de la prueba conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

## **6. PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER**

**¿La valoración probatoria en la primera instancia debió conducir a la declaratoria de la simulación?**

## **7. CONSIDERACIONES**

De conformidad con el artículo 323 del Código General del Proceso, **“El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”** (resaltos del Tribunal); siguiendo los parámetros de congruencia expuestos, la Sala Civil procederá a pronunciarse respecto de los argumentos puntuales de la apelación.

Las pretensiones, luego de la reforma de la demanda, tenían como objeto la declaratoria de simulación absoluta de los negocios de compraventa celebrados el **7 de febrero de 2005**, en el que **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ** le vende el 50% de propiedad sobre los inmuebles de MI 001-596758 y 001-596759 a **JUAN FERNANDO TORO ARCILA**; y el **11 de enero de 2008**, en el que **JUAN FERNANDO TORO ARCILA** y **JUANA NOHELIA ARCILA** le venden el 100% de los inmuebles mencionados a **SILVIA EUGENIA HERRERA RUÍZ**.

La controversia giró en torno a la hipótesis del demandante, en el sentido que **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ** le vendió el 50% de los inmuebles a **JUAN FERNANDO TORO ARCILA** para evitar el pago de la condena impuesta por el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín en favor de su expleado **SAMUEL CONRADO GONZALEZ** (fallecido).

Si se analiza acuciosamente el escrito de apelación, presentado de forma idéntica en primera y segunda instancia, el único yerro en la valoración probatoria que le endilga el apelante a la sentencia está relacionado con la posibilidad que el Juez adelantara esfuerzos para establecer la relación de consanguinidad en primer grado existente entre **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ** y **JUAN FERNANDO TORO ARCILA**.

En este sentido, la providencia de primera instancia reprocha la ausencia de los registros civiles que den cuenta de la relación de paternidad existente entre **TORO RAMÍREZ** y **TORO ARCILA**; sin embargo y pese a que el demandante tiene responsabilidad en que la prueba no se allegara al proceso, ello no fue impedimento para que se analizara el

asunto partiendo del supuesto fáctico del parentesco entre comprador y vendedor en el negocio celebrado el **7 de febrero de 2005**.

Luego de descartar la existencia de la prueba del parentesco, el *a quo* indicó:

**“Si en gracia de discusión el Despacho considerara acreditado dicho vínculo, es preciso recordar que si bien como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 de marzo de 1985, es común encontrar vínculos de consanguinidad en las compraventas simuladas, por tratarse de negocios de confianza, también ha sostenido esta Corporación que la simple relación de parentesco no basta para tener por simulados los actos jurídicos celebrados entre personas unidas por relaciones de familia, o de amistad íntima, pues es una realidad incontestable que se conformen sociedades de familia, por lo que no es extraño, atendiendo a las reglas de la experiencia, que una familia muestre interés en conservar y continuar usufructuando alguno o algunos de los bienes que, de uno u otro modo, los ha beneficiado a todos”** (Cfr. fol. 14 consecutivo 25).

El reproche del apelante se encamina a que el Juez debió utilizar sus poderes de dirección para procurar la prueba del parentesco; resultando insuficiente si se tiene en cuenta que el escenario de la familiaridad entre los contratantes del negocio jurídico del **5 de febrero de 2005** sí fue objeto de análisis por el Juez de primera instancia y no fue atacado en la apelación; ningún reproche le ameritó el argumento relacionado con la imposibilidad que la sola familiaridad conduzca automáticamente

a la declaratoria de la simulación, como único indicio y aislado del haz probatorio.

Frente al negocio en el que participó **OVIDIO DE JESÚS TORO**, deudor de **SAMUEL CONRADO GONZALEZ**, el ataque valorativo fue la ausencia de labores directivas para que la prueba se allegara; sin que se tuviera en cuenta que la prueba de la simulación fue extrañada aun bajo el supuesto de la familiaridad, que se estimó insuficiente, como hecho exclusivo, para arribar a una consecuencia como la perseguida por el demandante.

Conclusión a la que se arribaría si se probara que los compradores conocían a **SILVIA EUGENIA HERRERA**, que fue la segunda compradora de los inmuebles; en tanto el conocimiento entre las partes contractuales o su familiaridad no son concluyentes por sí solos para desprender una simulación. El Juez indagó y tanto **SILVIA HERRERA** como su esposo, declararon conocer a los vendedores sólo en virtud del negocio celebrado a través de clasificados del periódico y por referencias de los vecinos del inmueble, que siempre han tenido su posesión desde que se celebró el contrato.

En lo tocante con el negocio a través del cual supuestamente **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ** buscaba su insolvencia, sólo está probado el contrato y no hay indicios de su insolvencia; ningún esfuerzo probatorio hizo el demandante para acreditar hechos indicadores o indiciarios como lo exige el artículo 240 del Código General del Proceso, para que se pudiese completar el conjunto de indicios que



conllevaran a concluir que los contratos fueron simulados; la Corte Suprema de Justicia<sup>1</sup> ha indicado:

**“La simulación debe probarse por cuanto “toda ‘decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso’, sujetas a su valoración racional e integral ‘de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos’ (artículos 174 y 187 C. de P.C.), correspondiendo al demandante y no al juez la carga probatoria (actori incumbit probatio) con elementos probatorios idóneos, y sujetos a contradicción y, en contrapartida, al demandado demostrar in contrario (reus in excipiendo fit acto).”**

**(cas. civ. sentencia de 25 de enero de 2008, [SC-002-2008], exp. 00373).**

**En punto a esta particular cuestión, impera el principio de la libertad probatoria y por ende, las partes y terceros son admitidos a demostrar la simulación con todos los elementos probatorios permitidos por el ordenamiento, ad exemplum, la confesión de parte, los testimonios de terceros, los documentos, los indicios, las inspecciones judiciales y dictámenes periciales, de cuya apreciación lógica, sistemática y racional derive inequívocamente.”**

---

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil, M.P. William Namén Vargas. Exp: 20001-3103-003-2007-00100-0. Sentencia del 13 de octubre de 2011.

Así, la parte demandante únicamente acreditó que en octubre de 2004 **SAMUEL CONRADO GONZALEZ** (muerto) presentó ante el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín una demanda para el pago de una pensión por invalidez; queriendo derivar que en virtud de la demanda fue que **OVIDIO DE JESÚS TORO RAMÍREZ** vendió los inmuebles a **JUAN FERNANDO TORO ARCILA**; sin embargo, de esta prueba no puede extraerse el hecho indicativo del ánimo de insolvencia. No está demostrado que, para el **7 de febrero de 2005** fecha del negocio, **TORO RAMÍREZ** hubiese estado notificado de la demanda laboral en su contra; no hay ninguna prueba de su conocimiento, judicial o extrajudicial, respecto a esa pretensión para la fecha del contrato.

La demanda fue admitida el **20 de enero de 2005** y para el **8 de marzo del mismo año** apenas se estaba resolviendo una medida cautelar deprecada por la parte demandante, sin que exista constancia que para la fecha el demandado tuviese información respecto a un proceso que apenas se estaba gestando, para desprender inequívocamente que la compraventa fue una respuesta a ese hecho.

La sentencia de primera instancia en aquel proceso laboral fue proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín el **29 de febrero de 2008**, es decir más de 3 años después de la realización del negocio que se pretende atacar con simulación absoluta que fue del **7 de febrero de 2005**.

Más allá de esta prueba que no es concluyente del efecto perseguido por el demandante y la posible familiaridad que ni siquiera fue demostrada, no hay otros medios de convicción de las simulaciones; por tanto, indebida valoración probatoria, como lo afirma el apelante, no hubo en

la sentencia de primera instancia; el demandante incumplió con la carga demostrativa de la simulación.

Según la Corte Suprema de Justicia es necesario **“que los indicios y las conjeturas tengan el suficiente mérito para fundar en el Juez la firme convicción de que el negocio es ficticio; lo cual sólo ocurrirá cuando las inferencias o deducciones sean graves, precisas y convergentes. Vale decir, la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente; de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los negocios”**; fue así como los sucesores procesales de **SAMUEL CONRADO GONZÁLEZ** prescindieron de los testimonios y ratificaron en su apelación que existía deficiencia probatoria en este aspecto, debido que por el transcurrir prolongado del proceso, los testimonios se **“diluyeron con el tiempo.”**

En este contexto, no puede hacerse alusión a indebida valoración probatoria respecto de los indicios, porque no hubo siquiera prueba de hechos indicadores relevantes que condujeran al resultado simulatorio; por otro lado, el intento del demandante por develar un acto ficticio respecto al segundo contrato celebrado el **11 de enero de 2008** por **JUANA ARCILA** y **JUAN FERNANDO TORO** como vendedores con **SILVIA EUGENIA HERRERA**, también resultó inocuo.

La teoría del “fruto del árbol envenenado” a la que hizo alusión la parte demandante no tiene aplicación para el caso concreto; es una teoría aplicable a las pruebas ilícitas, circunstancia que no tiene relación con el debate; la intención era demostrar que la supuesta simulación del negocio del 2005 se extiende al del 2008, sin sustento probatorio; eran

dos contratos independientes y frente a cada uno se debía demostrar el *animus simulandi*, que brilla por su ausencia.

El demandante tenía una carga demostrativa ineludible al señalar los negocios como simulados; el artículo 167 del CGP preceptúa que, **“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”**

Pese a que el recurrente pretendía que el Juez de primera instancia aplicara la inversión de la carga de la prueba, ello no es procedente; el demandante de la simulación es quien debe demostrar su afirmación a través de indicios, testimonios, confesiones, documentos, entre otros; sin que hubiese sido verificado en el proceso.

La parte recurrente alegó que el Juez de primera instancia no valoró, como un aspecto favorable a sus pretensiones, la “falta de comparecencia” del demandado al proceso; sin embargo, la revisión del expediente da cuenta que la notificación de los demandados se consolidó a través del emplazamiento y el nombramiento de un curador *ad-litem*; circunstancia que no puede ser confundida con la renuencia a comparecer o a presentarse al interrogatorio; para el *sub examine* no era dable deducir indicios de la conducta procesal de las partes como lo pretende el demandante.

En este orden, no se advierten medios de prueba ni argumentos fácticos y jurídicos con la virtud para modificar o revocar la sentencia de primer grado; el demandante tenía una carga demostrativa que no fue satisfecha, por lo que la sentencia de primera instancia se **CONFIRMARÁ.**

## **8. COSTAS**

Se condenará en costas en esta instancia a la parte demandante y en favor de la demandada, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP.

## **9. AGENCIAS EN DERECHO**

De acuerdo con lo establecido por el artículo 365 del CGP en concordancia con el artículo 5 numeral 1 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en esta instancia, se fijan como agencias en derecho el equivalente a UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, a cargo la parte demandante y en favor de la demandada.

## **DECISIÓN**

La **SALA SEGUNDA CIVIL DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## **FALLA**

**PRIMERO:** Por las razones expuestas, se **CONFIRMA** la sentencia de la referencia.

**SEGUNDO:** En esta instancia se **CONDENA EN COSTAS** a la parte demandante y en favor de la demandada.

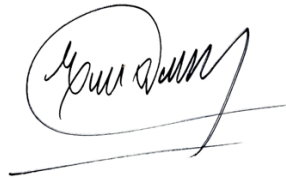
**TERCERO:** Se fijan como **AGENCIAS EN DERECHO** el equivalente a UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, a cargo la parte demandante y en favor de la demandada.

**NOTIFÍQUESE POR ESTADOS Y ELECTRÓNICAMENTE.**

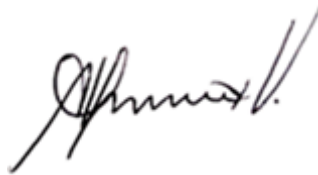
**LOS MAGISTRADOS**



**RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ**



**LUIS ENRIQUE GIL MARÍN**



**MARTHA CECILIA LEMA VILLADA**